

Capítulo 5

Mildred E. Warner
Marcela González Rivas
Mary Grant
Xue Zhang

LA MORATORIA DE CORTES DE AGUA EN ESTADOS UNIDOS: EL PAPEL DE LAS CIUDADES Y DE LOS ESTADOS

El agua potable es tratada como una mercancía en Estados Unidos, no como un derecho humano. Al inicio de la pandemia muchas ciudades y estados de ese país promulgaron una moratoria de los cortes de agua. En este capítulo analizamos en qué se diferencian estos estados y ciudades de los demás. Descubrimos que los estados que regulan los servicios públicos privados son más propensos a imponer moratorias, y los que tienen mayores tasas de casos de covid-19 lo hicieron antes. Los estados con control legislativo republicano han sido más reticentes a imponer moratorias. Las ciudades con más capacidad y más necesidad se han mostrado más propensas a ejecutar ese tipo medidas, pero las ciudades de los condados con más votantes republicanos lo han sido en menor medida. Estos resultados ponen de manifiesto la politización de la salud pública y el acceso al agua en Estados Unidos. El cambio hacia

una mejor identificación del valor del agua para la salud pública puede llevar a Estados Unidos a reconocer el agua como un derecho humano. Concluimos el capítulo con recomendaciones políticas para las ciudades, los estados y el gobierno federal.

INTRODUCCIÓN

Durante la pandemia de covid-19, muchos estados y municipalidades de Estados Unidos promulgaron una moratoria de los cortes de agua. Esto es una novedad. Históricamente, Estados Unidos ha sido reacio a proteger a los consumidores, ya que el agua se considera una mercancía en ese país. Las protecciones contra los cortes de agua son limitadas, y algunos estados incluso restringen a las empresas de servicios públicos y a las ciudades la posibilidad de ofrecer ayudas a los consumidores de bajos ingresos (UNC 2017). Muchas ciudades, especialmente las más antiguas de la región industrial conocida como el “cinturón del óxido”, se enfrentan al envejecimiento de sus infraestructuras y a la necesidad de aumentar las tarifas del agua para cubrir las mejoras de sus sistemas (Swain et al. 2020).

Baltimore es un caso bien conocido. Para mejorar la inversión en infraestructuras de agua la ciudad aprobó un aumento del 33% en la tarifa del agua, en el año 2016, a pesar de que el 15% de los clientes residenciales ya tenían facturas en mora - lo que supuso un total de 20 millones de dólares de deuda no cobrada por la ciudad (Jacobson 2016). Durante los primeros meses de la pandemia, el sistema público de agua de esa ciudad tomó varias medidas para garantizar el acceso al agua de los hogares. Sin embargo, el alcalde de Baltimore, Bernard Young, utilizó sus poderes de emergencia para retrasar la legislación que habría proporcionado protecciones duraderas. Ante el retraso, una coalición de grupos sindicales, ecologistas, de ayuda legal, de vivienda y religiosos trabajó con el ayuntamiento para poner en marcha un programa integral de asequibilidad del agua y una oficina de defensa del cliente para salvaguardar el acceso a lar-

go plazo al servicio de agua para todos los habitantes de la ciudad. La Coalición por el Derecho al Agua de Baltimore trató de avanzar en términos de justicia del agua prohibiendo la privatización del servicio, deteniendo los cortes y las ejecuciones hipotecarias por impago de la factura del agua y estableciendo un programa de asequibilidad basado en el porcentaje de los ingresos y un proceso independiente de resolución de conflictos (véase el capítulo de Grant en este volumen).

El caso de Baltimore refleja los principios básicos del agua pública -responsabilidad, acceso y participación- tal y como lo sugiere la Organización de las Naciones Unidas (de Albuquerque 2012). La rendición de cuentas requiere transparencia y el acceso requiere asequibilidad, pero también es necesaria la participación, ya que no se puede contar solo con el sector público para garantizar el acceso.

El agua es cada vez menos asequible para muchos hogares estadounidenses, especialmente los de bajos ingresos y las comunidades de color, ya que las facturas del agua superan el nivel recomendado por la ONU del 3% de los ingresos del hogar (Montag 2019). Los cortes por falta de pago son comunes en todo Estados Unidos, pero con el inicio de la pandemia la política cambió. Por ejemplo, desde 2014, más de 141.000 hogares de Detroit han sido desconectados del servicio de agua debido a facturas morosas. Pero el 12 de marzo de 2020, el día después de que la Organización Mundial de la Salud declarara la pandemia de covid-19, la gobernadora de Michigan, Gretchen Whitmer, y los funcionarios de la ciudad de Detroit anunciaron planes para detener los cortes y reconectar temporalmente los servicios de agua para todos los residentes (*The Guardian* 2020). El mismo día, la alcaldesa Kate Gallego de la ciudad de Phoenix, en el estado de Arizona, tuiteó:

A partir de hoy, @PHXWater detendrá todos los cortes de agua por falta de pago para asegurar que los residentes tengan acceso al agua para protegerse de la covid-19. Aquellos

usuarios que estén actualmente desconectados serán reconectados por @PHXWater. Esas residencias recibirán un servicio de agua de bajo flujo adecuado para la protección de la salud y la preparación de alimentos <<https://twitter.com/MayorGallego/status/1238163868876025858?s=20>>.

El mismo día, el estado de Louisiana lanzó un comunicado similar:

Debido a los riesgos para la salud pública asociados con el coronavirus, el Gobernador John Bel Edwards ha declarado la emergencia sanitaria en todo el estado. Dada la gravedad de estos acontecimientos y el impacto incierto que puede tener en los clientes de la Comisión, es necesaria una acción inmediata para asegurar que el servicio de agua no se desconecte por falta de pago (Comisión de Servicios Públicos de Louisiana, Orden Ejecutiva del 13 de marzo de 2020) .

La pandemia de covid-19 ha reorientado la atención de los funcionarios estatales y locales hacia la importancia del agua para la salud pública. Pero no siempre ha sido así.

CRECIENTE PROTECCIÓN CONTRA LOS CORTES DEL SERVICIO

Un estudio nacional publicado en 2015 reveló que solo el 8% de las ciudades de Estados Unidos protegían a los residentes de los cortes de agua; apenas 153 de una muestra de 1.897 municipios (Homsy y Warner 2020). El estudio reveló que las ciudades tenían más probabilidades de proteger a los residentes del corte de agua si el municipio era el propietario de la empresa de agua, tenía un consejo de administración de mayoría demócrata y tenía un objetivo de equidad social articulado en su plan municipal. La propiedad pública es importante. También lo es la planificación para la equidad social (Liao et al. 2019).

Al inicio de la pandemia, Food and Water Watch, un grupo de defensa del agua pública, comenzó a hacer un seguimiento de las ciudades y los estados que promulgaban moratorias en los cortes de agua. Mientras que Phoenix, Arizona, Detroit, Michigan y Luisiana fueron los primeros gobiernos de ciudades o estados que aprobaron moratorias, al 30 de abril de 2020 más de 483 ciudades y 35 estados también las habían impuesto (FWW 2020) (véase Figura 5.1). La pandemia ha alertado a los estados y a los gobiernos locales de la importancia crítica del acceso al agua potable para la salud pública.

¿Qué diferencia a los estados que impusieron moratorias de los que no lo hicieron? Realizamos un estudio y descubrimos que los estados que regulan a los operadores privados de agua eran más propensos a imponer una moratoria, y aquellos con mayores tasas de casos de covid-19 impusieron moratorias más rápidamente (Warner et al. 2020). También descubrimos que los estados con un control republicano consolidado tanto a nivel de la legislatura estatal como de la oficina del gobernador eran menos propensos a imponer una moratoria. El acceso al agua, así como otras medidas de salud pública durante la pandemia, están muy politizados (Warner y Zhang 2020). Esto hace que la participación de la sociedad civil sea especialmente importante para garantizar el acceso al agua, como el caso de Baltimore lo demuestra.

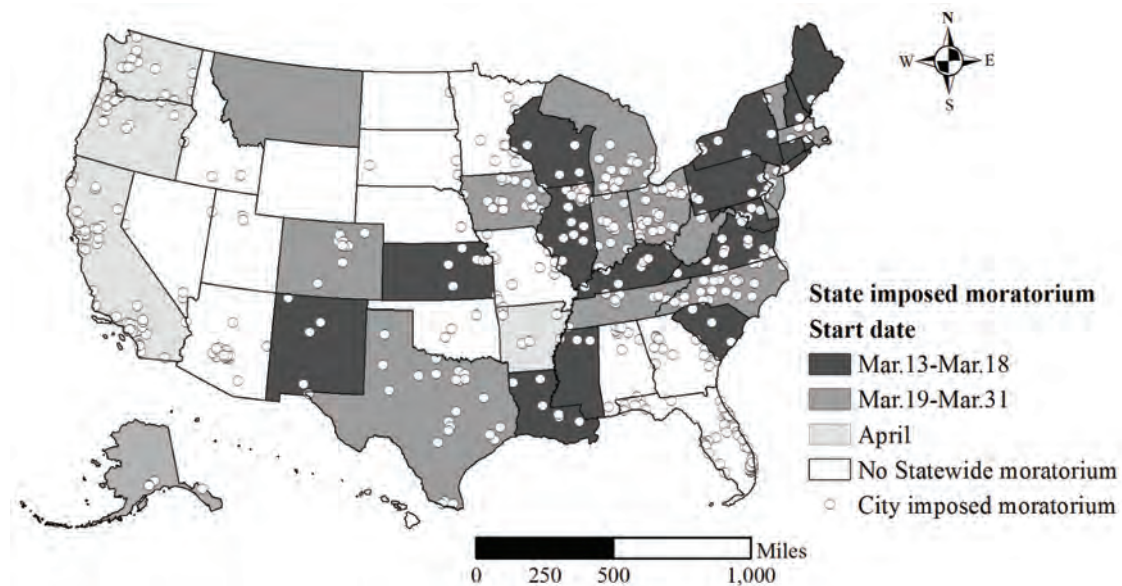
El papel del sector público es complicado y a veces contradictorio. Los estudios publicados demuestran que los estados son el mejor nivel para ofrecer programas de asistencia a los hogares de bajos ingresos en el área de los servicios públicos (Pierce et al. 2020). Mientras que algunos estados proporcionan protecciones a los consumidores, otros prohíben el trato preferencial a clientes específicos. Algunos limitan la capacidad de las empresas de servicios públicos o de las comunidades para financiar programas de asistencia para personas de bajos ingresos (Pierce et al. 2020, UNC Environmental Finance Center 2017).

Cuando los estados no actúan, las ciudades pueden hacerlo. En los 15 estados que no impusieron una moratoria estatal a los cortes,

135 ciudades impusieron la suya por decisión propia. Estas ciudades se caracterizan por tener una población con más alta presencia de minorías étnicas y una mayor desigualdad de ingresos, por lo que son más conscientes de la necesidad de equidad en el suministro del servicio de agua (Warner et al. 2020). Estas ciudades también tienen más capacidad local, medida por una mayor renta per cápita y un mejor estado de salud de las comunidades locales. Sin embargo, nuestro estudio también reveló que las ciudades de los condados con mayor porcentaje de población que votó a Trump en 2016 eran menos propensas a imponer moratorias.

Figura 5.1

Estados y ciudades que aprobaron moratorias durante la pandemia



Elaboración propia. Fuentes de los datos: TIGER/Line Shapefiles, Food and Water Watch, 2020.

Estos resultados muestran que la equidad en el suministro de agua está muy politizada en Estados Unidos, tanto a escala municipal como a nivel estatal. Las ciudades y los estados con control demócrata son más propensos a proteger a los residentes de los cortes de los servicios. Muchos operadores privados también promulgaron voluntariamente moratorias sobre los cortes de agua durante

la pandemia (AWWA 2020). Pero, ¿persistirán estas protecciones a medida que la crisis se prolongue? Dada la ausencia de liderazgo federal durante la pandemia, algunas ciudades y estados del país se han erigido como defensores de la equidad del agua. Pero, ¿hasta qué punto pueden esas ciudades ser eficaces, dada la complejidad y la fragmentación de la gobernanza del agua y el excepcionalismo de este país en materia de política hídrica?

LA POLÍTICA ESTADOUNIDENSE: COMPLEJA Y FRAGMENTADA

En muchos países, las reformas de la gobernanza del agua proporcionaron un marco de coordinación para una gestión más sustentable e integrada. En Estados Unidos, los expertos han reclamado un enfoque diferente, ya que los sistemas actuales están fragmentados y la responsabilidad recae en una multiplicidad de actores (Dig-Deep y US Water Alliance 2019).

Un factor unificador es que la mayoría de los estadounidenses reciben servicios públicos, aunque la regulación del suministro de agua implica una intervención gubernamental a varios niveles. A nivel de los estados, hay agencias y departamentos de salud y medio ambiente que participan en la regulación del sector, además de las entidades que supervisan la regulación de las tarifas de los servicios públicos privados y, a veces, públicos. A nivel federal, las políticas se centran principalmente en la regulación ambiental, estableciendo normas de calidad del agua y de gestión de residuos.

La pandemia ha demostrado los desafíos de una respuesta rápida en una estructura de gobernanza con múltiples actores. Por ejemplo, aunque California no aprobó una moratoria de cortes hasta el 2 de abril de 2020, varias ciudades del estado ya estaban preparadas para suspender los cortes de agua justo después de la declaración de pandemia del 12 de marzo. Para actuar, necesitaban obtener la aprobación de otros organismos. Por ejemplo, la Comisión de Servicios Públicos de San Francisco requirió la aprobación del Departamento de Salud antes de actuar (Buford y Campbell 2020), lo que

retrasó la moratoria de cortes durante 48 horas, lo que significa que los hogares morosos que sufrieron el corte del agua tuvieron que pagar y esperar antes de que se les restableciera el servicio.

A esta complejidad de la gobernanza hay que añadir el reto de las zonas de servicio fraccionadas: es decir, las jurisdicciones de las ciudades no coinciden necesariamente con las jurisdicciones de los servicios de agua. ¿Cómo pueden las ciudades proteger a los residentes de bajos ingresos que no reciben el servicio de su propia empresa? El liderazgo de las ciudades es crucial en este caso, pero también es necesario que los gobiernos de los estados y la administración federal proporcionen recursos y directrices sólidas sobre la protección del acceso al agua.

Además de la complejidad de la gobernanza del agua, Estados Unidos es una excepción con respecto al resto del mundo en cuanto a la falta de reconocimiento del agua como derecho humano. Esta realidad contrasta fuertemente con la de los países europeos, donde diversos mecanismos garantizan el acceso al agua, incluyendo el suministro de un nivel mínimo de subsistencia para los hogares (siguiendo las directrices de la Organización Mundial de la Salud), tarifas con descuento (tarifas sociales o fondos sociales) y prohibiciones totales de desconexión del agua. En la Unión Europea, Austria, Francia, Irlanda y el Reino Unido tienen prohibidas las desconexiones totales, mientras que en otros países la legislación exige a los operadores que aseguren el suministro de una cantidad mínima de subsistencia utilizando dispositivos de reducción de caudal o, en algunos casos, contadores de agua que funcionan con monedas. En los países que sí permiten las desconexiones de agua (como Bélgica, Noruega y los Países Bajos), algunos de los requisitos incluyen la aprobación de un tribunal especial u otro organismo gubernamental (EurEau 2016).

El enfoque europeo es coherente con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de Naciones Unidas para el año 2030. Existe un acuerdo general de que el acceso al agua es fundamental para el desarrollo, como se refleja en el compromiso sexto sobre el acceso al

agua, el saneamiento y la higiene, y la decisión de 2010 de la Asamblea General de la ONU sobre el reconocimiento del agua como derecho humano. En general, la administración de Donald Trump renunció al liderazgo en este foro mundial. Si bien hay variantes en la forma en que los ODS son adoptados por diferentes países, un informe del IG20 que analiza el grado en que los países alinean las agendas nacionales con los ODS, las estrategias, los planes de acción y los sistemas de rendición de cuentas revela que Estados Unidos muestra los niveles más bajos de liderazgo político (Bertelsmann Stiftung y SDSN 2018).

EL POTENCIAL DE EQUIDAD DEL AGUA EN ESTADOS UNIDOS

El desdén de Estados Unidos para con los esfuerzos mundiales de promoción del desarrollo es alarmante porque, pese a ser uno de los países más ricos, tiene necesidades urgentes de servicios de agua. Se calcula que entre 1,4 y 2 millones de estadounidenses carecen de agua corriente (DigDeep y US Water Alliance 2019), y muchas comunidades se enfrentan al riesgo de contaminación y a la imposibilidad de pagar unas facturas que aumentan rápidamente. Esto ha tenido consecuencias devastadoras para las comunidades de bajos ingresos, las comunidades indígenas y las comunidades de color, que se enfrentan a mayores tasas de desconexión y a los efectos estructurales de la morosidad en las facturas (Montag 2019, DigDeep y US Water Alliance 2019).

En este contexto, muchas ciudades y gobiernos estatales respondieron rápidamente con moratorias temporales para garantizar el acceso al agua de los grupos más vulnerables durante la pandemia de covid-19. Sin embargo, se trata de medidas temporales. Ya en agosto de 2020, las moratorias aprobadas por 11 estados habían expirado, pero la pandemia de covid-19 y la crisis económica resultante continúan (FWW 2020). Esto plantea la cuestión de cómo lograr que el acceso al agua sea duradero. Hay varios retos para hacer que la protección del acceso al agua se mantenga más allá de la pan-

demia actual. Estos retos no solo se refieren a la complejidad de la política de gobernanza del agua de Estados Unidos., sino también a la reticencia de este país a reconocer el derecho humano al agua (para un debate más extenso sobre la relevancia de la covid-19 en relación al derecho humano al agua, véase Loftus y Sultana en este volumen).

La crisis de asequibilidad del agua se produce al mismo tiempo que las ciudades y regiones del país se enfrentan a problemas de deterioro de las infraestructuras y a la necesidad de hacer frente al cambio climático, lo que plantea importantes retos (como lo muestra el capítulo sobre Pittsburgh de González Rivas en este volumen). Las acciones en materia de política del agua se han centrado en la eficiencia, la inversión en nuevas tecnologías y las infraestructuras verdes, mientras que han pasado por alto cuestiones de equidad como la garantía del acceso al agua (Homsy y Warner 2020).

Sin embargo, las ciudades pueden aplicar un enfoque más amplio y sostenible. Filadelfia es un ejemplo de cómo un departamento público de agua integró su programa de asequibilidad como parte de las subidas de tarifas que financian el plan de inversión en infraestructuras. A pesar de los muchos retos que plantea el agua, Filadelfia ha lanzado un programa de asequibilidad líder. Como muchas otras ciudades, Filadelfia tiene una infraestructura de agua en decadencia. La ciudad no ha podido mantener el mantenimiento y las inversiones debido a los altos costes y a la limitada financiación federal desde la década de 1970. Sin embargo, en 2011 la ciudad puso en marcha un plan de inversión en infraestructuras para cumplir con las exigencias de calidad del agua y las normas ambientales. Las tarifas del agua aumentaron para financiar la inversión, y esto provocó un aumento del número de desconexiones. Aunque el Departamento de Agua tenía varios programas de asistencia al usuario para los hogares de bajos ingresos, su cobertura era limitada y a medida que las facturas aumentaban también lo hacía el número de hogares que no podían pagarlas. Como respuesta, la ciudad lanzó el Programa de Asistencia Escalonada en el verano de 2017 (City

of Philadelphia 2017). El programa es un enfoque novedoso porque se basa en el nivel de asequibilidad de un hogar (frente al enfoque común de ofrecer un descuento en la factura del servicio de agua). Este programa es coherente con el umbral de asequibilidad de las Naciones Unidas, de un máximo de 3 % de los ingresos del hogar, ya que garantiza que los hogares con bajos ingresos puedan pagar sus facturas de agua.

Para contar con un enfoque integral sostenible en el que la equidad no sea una idea de última hora, las ciudades y los estados deben ampliar el enfoque de la gestión sostenible del agua para garantizar la protección del acceso de los grupos más vulnerables. El relator especial de Naciones Unidas sobre el derecho humano al agua potable y al saneamiento señala que el acceso, la responsabilidad y la participación son principios fundamentales del derecho humano al agua. El agua debe estar disponible, ser accesible y asequible, y se debe garantizar la calidad y la seguridad, así como la sostenibilidad a largo plazo (de Albuquerque 2012). Pero esto es un reto en el contexto estadounidense de aumento de la inasequibilidad y la necesidad de que las ciudades reinviertan en sus sistemas de agua, como muestran los capítulos sobre Pittsburgh y Baltimore en este volumen. Así pues, la participación pública es fundamental para presionar al gobierno para que garantice el acceso.

CONCLUSIÓN

La pandemia ha puesto de relieve la importancia del acceso al agua para la salud pública. Mientras cientos de localidades y 35 estados de Estados Unidos suspendieron los cortes de agua en marzo y abril de 2020, el mosaico de regulaciones locales y estatales dejó a millones de estadounidenses desprotegidos y vulnerables a la pérdida del servicio. A continuación se presentan recomendaciones para que cada uno de los tres niveles de gobierno tome medidas para garantizar que ninguna persona se quede sin el agua necesaria para protegerse a sí misma, a sus familias y a sus comunidades de la pro-

pagación de enfermedades.

Acción local

Los proveedores de agua a nivel local están ubicados en la primera línea y son los que más rápidamente pueden adoptar políticas y protecciones para sus residentes para garantizar el acceso al agua potable durante la pandemia y después. Estos proveedores pueden suspender los cortes, restablecer el servicio de forma segura, renunciar a los cargos por mora y a las multas, y retrasar los aumentos de las tarifas tanto durante la pandemia como durante al menos 180 días después del final del estado de emergencia. 483 ciudades estadounidenses aprobaron moratorias durante la pandemia, pero no todas siguieron las mismas orientaciones para el restablecimiento del servicio y la exención de tarifas.

Para lograr una sostenibilidad a más largo plazo, los proveedores locales deben ampliar los programas de asistencia existentes para permitir que los hogares que sufran la pérdida de empleo y de salarios a causa de la covid-19 sean automáticamente elegibles para la asistencia. Al expirar las moratorias, se deben ampliar los periodos de los planes de pago a 24 meses para distribuir el reembolso de las facturas pendientes a lo largo de un periodo más largo y reducir así la carga mensual de los hogares. Debería reservarse dinero para la condonación de la deuda de los hogares de más bajos ingresos. Los gobiernos locales pueden ayudar aumentando la financiación para la asistencia al sector del agua, incluyendo la asignación de la ayuda federal *Community Development Block Grant* y dinero del Fondo de Alivio del Coronavirus para cubrir el coste de la condonación de la deuda del agua de los hogares con bajos ingresos. La Ley *CARES* (aprobada en abril de 2020) proporcionó 150.000 millones de dólares al Fondo de Alivio del Coronavirus para los estados y los gobiernos locales.

Las ciudades pueden ir más allá de la asistencia y acercarse a la asequibilidad real y a largo plazo estableciendo planes de pago basados en porcentaje de ingresos y condonación de la deuda para

los hogares de bajos ingresos. Este modelo de asequibilidad limita efectivamente las facturas de agua a un nivel que un hogar puede pagar en función de sus ingresos, como el umbral de las Naciones Unidas del 3% de los ingresos del hogar para el servicio básico de agua y alcantarillado. Mientras que este modelo de asequibilidad es relativamente común en el sector del gas y la electricidad en Estados Unidos, sólo Filadelfia y Baltimore han adoptado programas similares (Reuters 2020). Sin embargo, se están realizando esfuerzos en este sentido en las áreas metropolitanas de Detroit y Chicago (Detroit People's Water Board 2020, the Real News Network 2020).

En general, las ciudades deberían estudiar la posibilidad de prohibir los cortes de agua de forma permanente. La ciudad de Nueva York, el mayor proveedor de agua del país, ya no recurre a cortes de agua por falta de pago. Varias ciudades, como Madison (en Wisconsin) y Albany (en Nueva York), nunca ejecutan cortes del servicio por impago de la factura (Food & Water Watch 2020). A medida que la pandemia de covid-19 demuestra la importancia crítica para la salud pública del derecho humano al agua, las ciudades deberían cambiar este método de cobro punitivo por prácticas más humanas.

Acción estatal

Pese a que 35 gobiernos estatales han aprobado medidas para suspender las desconexiones del servicio de agua, estas acciones han sido variadas en su alcance y contexto de aplicación. A fines de junio de 2020, 17 estados habían ordenado un tipo de moratoria que se extendía a todos los servicios de agua, pero sólo California, Michigan, Nueva York, Ohio, Washington y Wisconsin incluyeron la restauración del servicio para los hogares previamente desconectados. A finales de julio, varias de estas acciones estatales ya habían expirado. El informe de la Comisión de Medio Ambiente y Obras Públicas del Senado de Estados Unidos, de julio de 2020, reveló que sólo 10 estados y el distrito federal de Washington, D.C. tenían moratorias estatales completas sobre desconexiones de agua y electricidad aún en vigor.

Para cumplir con las normas establecidas por la Oficina del Relator de Naciones Unidas para el Agua y el Saneamiento (de Albuquerque 2012) los estados deben garantizar la responsabilidad, la accesibilidad y la participación pública en los sistemas locales de agua. California ofrece un modelo de políticas de recolección y registro de datos. En 2020, California se convirtió en el primer estado del país en exigir a todos los sistemas de agua el seguimiento y la notificación de las desconexiones por incapacidad de pago. Se trata de un modelo que todos los estados deberían adoptar, para que todos los proveedores puedan hacer un seguimiento de los cortes y reconexiones del servicio en los hogares y publicar esta información en línea de manera que sea fácilmente accesible para el público.

La participación requiere algo más que información para garantizar la rendición de cuentas. También requiere tener voz en la toma de decisiones de los servicios públicos. Deben ofrecerse protecciones democráticas antes de la venta o el arrendamiento de los servicios de agua o aguas residuales a entidades con ánimo de lucro. Varios estados, incluido Wisconsin, exigen el voto del electorado de la zona a la que da servicio un servicio municipal antes de su venta o concesión a una entidad privada. Este es un buen modelo que podrían adoptar otros estados. Algunas ciudades, como Missoula (en Montana), han utilizado vías democráticas para restablecer la propiedad y el control públicos (Mann y Warner 2019).

Para garantizar la accesibilidad, los estados deben establecer protecciones de corte duraderas para las poblaciones vulnerables. La legislación podría seguir el modelo de la normativa municipal de Nueva York del año 2008, que prohíbe la desconexión del servicio a los hogares con personas con enfermedades graves y condiciones médicas de gravedad, niños pequeños, personas mayores, ciegos y discapacitados.

Acción federal

Los estados y los municipios no pueden abordar por sí solos la crisis de asequibilidad. El Congreso de Estados Unidos debe aprobar una

ley que imponga una moratoria a nivel nacional sobre las desconexiones de los servicios públicos, con el restablecimiento del servicio para todos los hogares previamente desconectados por falta de pago. Además, el gobierno federal debe proporcionar ayuda financiera a los hogares de bajos ingresos para ayudar a cubrir los costes de las facturas de agua atrasadas. En mayo de 2020, la Cámara de Representantes aprobó la Ley *HEROES*, que incluía una moratoria nacional de los cortes de agua con restablecimiento del servicio, 1.500 millones de dólares para apoyar el acceso al agua de las personas con bajos ingresos, y una importante ayuda a los gobiernos locales, pero no está claro si el Senado incluirá estas disposiciones en el nuevo paquete de estímulo covid-19 a ser aprobado en agosto. La participación es necesaria para garantizar la responsabilidad y el acceso del público. La coalición nacional *No Shutoffs* [No a las Cortes] se está organizando para exigir la inclusión de una moratoria nacional de cortes de servicios públicos.

Las protecciones ante cortes por sí solas tampoco son suficientes. Debemos abordar la asequibilidad a largo plazo y las necesidades de inversión. Los proveedores públicos de agua se han visto muy afectados financieramente por la crisis. Los sistemas de agua deben estar bien financiados para que puedan seguir suministrando agua potable y pagando a su personal. El gobierno federal debe proporcionar un alivio financiero de emergencia para los servicios públicos de agua y saneamiento, que prevén pérdidas de ingresos superiores a 25.000 millones de dólares, en gran parte debido a la disminución del consumo industrial y comercial (American Water Works Association y Association of Metropolitan Water Agencies 2020, National Association of Clean Water Agencies 2020). A largo plazo, el Congreso de Estados Unidos debería aprobar la Ley de Asequibilidad, Transparencia, Equidad y Fiabilidad del Agua (HR 1417, S 611) para restablecer el compromiso del gobierno federal con las infraestructuras hídricas. Esta legislación proporcionaría 35.000 millones de dólares al año, la cantidad necesaria para cumplir con la normativa federal sobre la calidad del agua, según los

últimos estudios de necesidades de la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos (U.S. Environmental Protection Agency 2016 y 2018). Esto proporcionaría a los proveedores locales de agua los recursos necesarios para suministrar agua segura y asequible a toda la población.

La pandemia de covid-19 podría ayudar a que Estados Unidos invierta más y sea más equitativo en sus sistemas de agua potable. Los estados y las ciudades han liderado el camino, pero ellos solos no pueden reconstruir los sistemas locales de agua. Se necesita ayuda federal. Las moratorias estatales y locales de las desconexiones durante la pandemia son un primer paso hacia el reconocimiento del derecho humano al agua. Unos sistemas de agua accesibles, asequibles y transparentes constituyen la clave para la gobernanza democrática del sector, reconociendo que el acceso al agua es fundamental para la salud pública.

AGRADECIMIENTOS

Esta investigación contó con financiamiento parcial del Instituto Nacional para la Alimentación y la Agricultura del Departamento de Agricultura de Estados Unidos (subvención #2019-68006-29674). Este capítulo es una versión revisada y ampliada de “Water Equity, COVID-19 and the Role of US Cities and States” (*Viewpoint, Town Planning Review*: <https://doi.org/10.3828/tpr.2020.66>).

REFERENCIAS

American Water Works Association (AWWA) y Association of Metropolitan Water Agencies. 2020. The Financial Impact of the COVID-19 Crisis on U.S. Drinking Water Utilities. 14 de abril. <https://bit.ly/2Gx0aOC> (consultado el 21 de setiembre de 2020).

AWWA. 2020. Shutoffs and Return to Service Guidance. <https://bit.ly/3l5LX-qS> (consultado el 21 de setiembre de 2020).

Bertelsmann Stiftung y Sustainable Development Solutions *Network*. 2019.

- Global Responsibilities, Implementing the Goals. G20 and Large Countries Edition.* Gütersloh: Bertelsmann Stiftung and Sustainable Development Solutions Network.
- Buford, T. y Campbell, S. 2020. Some Towns Still Haven't Halted Utility Shut-offs for Unpaid Water Bills During Coronavirus, Even as Federal Lawmakers Demand It. *ProPublica*. 13 de marzo. <https://bit.ly/2I7NEpi> (consultado el 21 de setiembre de 2020).
- City of Philadelphia. 2017. Philadelphia Launches New, Income-Based, Tiered Assistance Program. <https://bit.ly/2GCaUeM> (consultado el 21 de setiembre de 2020).
- de Albuquerque, C. 2012. *On the Right Track: Good Practices in Realizing the Rights to Water and Sanitation*. Lisboa: United Nations Special Rapporteur on the Human Right to Safe Drinking Water and Sanitation
- Detroit People's Water Board. 2020. Water Affordability Program. <https://bit.ly/3mZ6uhq> (consultado el 21 de setiembre de 2020).
- DigDeep y US Water Alliance. 2019. Closing the Water Gap in the United States: A National Action Plan. <https://bit.ly/2TZ2fGb> (consultado el 21 de setiembre de 2020).
- EurEau. 2016. Access to Water and Measures in Case of Non-Payment. Briefing Note August 2016. <https://bit.ly/3k2XO7S> (consultado el 21 de setiembre de 2020).
- Food and Water Watch. 2020. External-Local-State Water Shutoff Moratoria Amidst Coronavirus Database. <https://bit.ly/3l5OFwC> (consultado el 21 de setiembre de 2020).
- Homsy, G.C. y Warner, M.E. 2020. Does public ownership of utilities matter for local government water policies? *Utilities Policy*. <https://doi.org/10.1016/j.jup.2020.101057>
- Jacobson, N. J. 2016. Keeping the Water On: Strategies for Addressing High Increases in Water and Sewer Rates for Baltimore's Most Vulnerable Customers. *The Abell Report* 29: 1-28. Baltimore: The Abell Foundation.
- Liao, L., Warner, M.E. y Homsey, G.C. 2019. Sustainability's Forgotten Third E: What Influences Local Government Actions on Social Equity? *Local Environment* 24: 1197-1208. 10.1080/13549839.2019.1683725
- Mann, C.L. y Warner, M.E. 2019. Power Asymmetries and Limits to Em-

- inent Domain: The Case of Missoula Water's Municipalization. *Water Alternatives* 12(2): 725-737.
- Montag, C. 2019. *Water/Color: A study of race and the affordability crisis in America's cities*. Nueva York: Thurgood Marshall Institute at the NAACP Legal Defense and Education Fund, Inc.
- National Association of Clean Water Agencies. 2020. Coronavirus Impacting Clean Water Agencies; Local and Ratepayers Need Assistance. 20 March. <https://bit.ly/3n2xbSj> (consultado el 21 de setiembre de 2020).
- Pierce, G., Chow, N. y Deshazo, J.R. 2020. The case for state-level drinking water affordability programs: Conceptual and empirical evidence from California. *Utilities Policy* 63. <https://doi.org/10.1016/j.up.2020.101.006>
- Reuters. 2020. <https://reut.rs/2TZ3Yv9>. 22 de marzo (consultado el 21 de setiembre de 2020).
- Swain, M., McKinney, E. and Susskind, L. 2020. Water Shutoffs in Older American Cities: Causes, Extent, and Remedies. *Journal of Planning Education and Research*. <https://doi.org/10.1177/0739456X20904431>
- The Guardian. 2020. Detroit suspends water shutoffs over Covid-19 fears. 12 de marzo. <https://bit.ly/3exSRmD> (consultado el 21 de setiembre de 2020).
- The Real News Network. 2017. A Chicago Alderman Introduced a Water Affordability Ordinance. 10 December. <https://bit.ly/2I9D9BQ> (consultado el 21 de setiembre de 2020).
- UNC Environmental Finance Center. 2017. *Navigating Legal Pathways to Rate-Funded Customer Assistance Programs: A Guide for Water and Wastewater Utilities*. Chapel Hill: UNC Environmental Finance Center.
- U.S. Environment and Public Works Committee Minority Staff Analysis. 2020. Update: Current State Efforts to Protect Residents from Utility Disconnections. 23 de julio. <https://bit.ly/3oYKGod> (consultado el 21 de setiembre de 2020).
- U.S. Environmental Protection Agency (EPA). 2016. Clean Watersheds Needs Survey 2012: Report to Congress. January. <https://bit.ly/32kYZcN> (accessed September 21, 2020)..
- U.S. Environmental Protection Agency (EPA). 2018. Drinking Water Infrastructure Needs Survey and Assessment: Sixth Report to Congress.

- March. <https://bit.ly/3531LFq> (consultado el 21 de setiembre de 2020).
- Warner, M.E., Zhang, X. y González Rivas, M. 2020. Which States and Cities Protect Residents from Water Shutoffs in the COVID-19 Pandemic? *Utilities Policy*.
- Warner, M.E. y Zhang, X. 2020. Social Safety Nets and COVID-19 Stay Home Orders across US States: A Comparative Policy Analysis. *Journal of Comparative Policy Analysis*.

